

Santiago, dos de mayo de dos mil veinticuatro.

VISTO:

I.- En cuanto a la excepción de prescripción opuesta de conformidad a lo preceptuado en el artículo 310 del Código de Procedimiento Civil:

1°.- Que la demandada Rozas Saavedra sostiene que en la especie operó la prescripción de la acción civil por responsabilidad extracontractual que se dedujo en autos, en atención a que los hechos acaecieron el 20 de abril de 2012, de manera que el término de cuatro años que se estatuye para estos efectos se completó el 20 de abril de 2016, sin que existan actos que hubieren interrumpido o suspendido dicho plazo, considerando que la parte contraria no obró de acuerdo a lo regulado en el artículo 61 incisos 1° y 3° del Código Procesal Penal.

2°.- Que evacuando el traslado conferido, el Consejo de Defensa del Estado sostuvo, en primer lugar, que la demanda civil se dedujo en el plazo y los términos que regulan los artículos 61 y 68 del Código Procesal Penal, en segundo lugar, argumentó que operó la interrupción de la prescripción en virtud de la querella entablada y la solicitud de diligencias para el esclarecimiento de los hechos y, finalmente, alegó que se verifica la renuncia de la prescripción por el reconocimiento de la apelante en la audiencia de procedimiento abreviado del 14 de junio de 2017.

3°.- Que en efecto, es propicio recordar que el instituto de la prescripción extintiva reposa sobre dos presupuestos: la inactividad del acreedor y la pasividad del deudor. Así lo considera el artículo 2514 del Código Civil, al estatuir "*La prescripción que extingue las acciones y derechos ajenos exige solamente cierto lapso de tiempo, durante el cual no se hayan ejercido dichas acciones*"; término que en la especie es de cuatro años, según lo señala el artículo 2332 del mismo código [*"Las acciones que concede este título por daño o dolo, prescriben en cuatro años contados desde la perpetración del acto"*].

4°.- Que en la especie, la época de la comisión de ilícito fue fijada el 20 de abril de 2012, de manera que desde ahí debe computarse el término de prescripción. Ahora bien, de acuerdo al artículo 68 del Código Procesal Penal, que estatuye "*Si antes de comenzar el juicio oral, el procedimiento penal continuare de conformidad a las normas que regulan el procedimiento*



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: MSKXXNKMXXH

abreviado, o por cualquier causa terminare o se suspendiere, sin decisión acerca de la acción civil que se hubiere deducido oportunamente, la prescripción continuará interrumpida siempre que la víctima presentare su demanda ante el tribunal civil competente en el término de sesenta días siguientes a aquél en que, por resolución ejecutoriada, se dispusiere la suspensión o terminación del procedimiento penal”, era menester que el acto interruptivo se ejecutara dentro del término de prescripción, lo que en la especie no se verifica si se considera que solo el 27 de enero de 2017 se dedujo querrela criminal por el Consejo de Defensa del Estado junto con la petición de diligencias que en ese momento formuló, razón por la que la demanda civil interpuesta en esta causa presentada dentro del término de sesenta días previsto en el citado artículo 68 carece de relevancia, pues a esa fecha se había completado el plazo de prescripción.

Por lo antes expuesto, el segundo basamento del demandante para oponerse a la excepción de prescripción también debe desestimarse.

5°.- Que distinta es la suerte del tercer argumento del actor con el que se opone al acogimiento de la excepción de prescripción. En efecto, el artículo 2494 del Código de Bello dice: *“La prescripción puede ser renunciada expresa o tácitamente; pero sólo después de cumplida.*

Renúnciase tácitamente, cuando el que puede alegarla manifiesta por un hecho suyo que reconoce el derecho del dueño o del acreedor; por ejemplo, cuando cumplidas las condiciones legales de la prescripción, el poseedor de la cosa la toma en arriendo, o el que debe dinero paga intereses o pide plazo”.

6°.- Que la aludida renuncia puede ser expresa o tácita, esto es, puede manifestarse a través de medios formales y explícitos o, por la inversa, puede desprenderse de la actuación de quien puede valerse de ella en el caso de que realice un hecho o acto que suponga el reconocimiento del derecho. En este sentido se ha de subrayar, además, que la renuncia, expresa o tácita, es una manifestación de voluntad de carácter unilateral e irrevocable. Unilateral, por cuanto para perfeccionarse requiere de la voluntad de una sola persona y no necesita ser aceptada por la parte a quién beneficia, e irrevocable, en el sentido de que no se puede dejar sin efecto por la sola voluntad del renunciante.



Esta renuncia tácita a la prescripción sólo dice relación con el interés personal del renunciante y su efecto se produce por el hecho de no invocarla. Al respecto se ha sostenido por la doctrina que la existencia del instituto de la prescripción tiene como razón de ser argumentos de orden público; pero una vez que se ha cumplido el tiempo [...] la ley deja entregada a la voluntad del deudor la facultad de prevalerse del efecto extintivo y éste puede, por ello, renunciar a él. Ese efecto está bajo la disponibilidad de quien resulta beneficiado con la prescripción (Ramón Domínguez Águila, La prescripción extintiva. Doctrina y jurisprudencia. Editorial Jurídica de Chile, primera edición, marzo de 2017. Página 92).

Del mismo modo cabe relevar que, vinculada con lo anterior, se encuentra, a su vez, la exigencia de que el término previsto en la ley debe transcurrir íntegramente para que la prescripción pueda resultar procedente, pues se requiere de la concurrencia del modo de extinguir los derechos y obligaciones por el paso del tiempo.

7°- Que en este sentido, y conforme quedó dicho a lo largo del fallo que se revisa, la demandada aceptó los hechos imputados, es decir, confesó ante otro tribunal, en sede penal, la ocurrencia de los hechos materia de la acusación, de conformidad a lo preceptuado en el artículo 406 del Código Procesal Penal y que, finalmente, terminaron demostrados con autoridad de cosa juzgada, con los efectos que derivan de la aplicación de los artículos 178 y 180 del Código de Procedimiento Civil. Ergo, se verifica en la especie la situación que regula el inciso 2° del artículo 398 del último código citado, pues la demandada confesó los hechos configurativos del ilícito en un juicio diverso.

En consecuencia, sólo resta concluir que la parte demandada, en ese procedimiento abreviado renunció a alegar el término de prescripción que a esa época se había completado y que la beneficiaba, lo que permite desestimar la excepción de prescripción que se dedujo en segunda instancia.

II.- En cuanto al recurso de apelación de la demandada y adhesión de la demandante:

Se reproduce la sentencia en alzada, previa eliminación del primer párrafo del motivo décimo cuarto.

Y se tiene en su lugar y, además, presente:



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: MSKXXNKMXXH

8°.- Que las alegaciones formuladas por la demandada en su escrito de apelación abordan asuntos que debió discutir en la etapa procesal correspondiente, lo que no hizo, en tanto se mantuvo rebelde en la contestación de la demanda, sin perjuicio de lo cual debe recordarse que el artículo 175 del Código de Procedimiento Civil dispone: "*las sentencias definitivas e interlocutorias firmes producen acción o excepción de cosa juzgada*", regla que conlleva, por un lado –acción- la facultad para solicitar el cumplimiento, incluso forzado, de la pretensión consolidada en el fallo que participe de alguna de dichas categorías y por la otra –excepción- se identifica literalmente con las voces latinas "res" "iudicata" y con la antigua máxima "res iudicata pro veritate habetur", esto es, que la cosa juzgada en la sentencia ha de tenerse por verdad.

Asimismo, es posible distinguir entre cosa juzgada formal y cosa juzgada sustancial, importando para este caso, la última de las mencionadas, cuyo efecto se produce cuando la condición de inatacable es inmutable, tanto dentro del proceso en que se dictó la sentencia como respecto de cualquier otro posterior. Así se ha sostenido que atañe a los efectos jurídico-procesales del litigio y en particular a la eficacia de la sentencia pronunciada para resolver el asunto que ha sido materia de éste e importa una limitación al derecho que, por regla general, tienen las partes para discutir lo decidido, el que adquiere vigor en tanto se inicie un pleito con una pretensión ya resuelta en una sentencia ejecutoriada previa. Por consiguiente, su objetivo es impedir un nuevo pronunciamiento sobre materias respecto de las cuales ha recaído ya una decisión.

9°.- Que, en particular, resulta relevante el efecto que produce el pronunciamiento de una sentencia penal en sede civil, disponiendo el artículo 178 del Código de Procedimiento Civil "*En los juicios civiles podrán hacerse valer las sentencias dictadas en un proceso criminal siempre que condenen al procesado*" y a su vez, el artículo 180 del mismo texto legal, prescribe "*Siempre que la sentencia criminal produzca cosa juzgada en juicio civil, no será lícito en éste tomar en consideración pruebas o alegaciones incompatibles con lo resuelto en dicha sentencia o con los hechos que le sirvan de necesario fundamento*".

10°.- Que en consecuencia, las sentencias condenatorias dictadas en materia criminal producen cosa juzgada en lo civil, cuyo alcance comprende



el que no puedan argüirse en estas últimas circunstancias contrarias al hecho delictivo o a la culpabilidad del condenado, ni tomarse en cuenta alegaciones o pruebas incompatibles con lo allí resuelto o con los hechos que le sirven de necesario fundamento. Lo anterior encuentra su explicación en la necesidad de evitar que la decisión en lo civil contradiga lo resuelto por la justicia criminal.

Así, nuestra jurisprudencia reiteradamente ha señalado que el citado artículo 178 resulta natural, por cuanto no puede el juez en un proceso de tal carácter concluir que determinada conducta no es ilícita si se ha declarado que ella constituye un delito penal; de manera que la actividad del juez civil estará encaminada a determinar si concurre el resto de los elementos de la responsabilidad extracontractual, especialmente el relacionado con la prueba del daño y particularmente si la conducta antijurídica reconocida en el proceso penal y por ello inamovible, ha causado daño a la persona o propiedad de otro, pues una vez establecido aquello, nace la obligación de reparar el daño causado a través de una indemnización de carácter pecuniario.

11°.- Que de este modo, el efecto de cosa juzgada de la sentencia penal condenatoria en el proceso civil conlleva admitir la existencia material del hecho que motivó la condena punitiva y que sirve de fundamento a la pretensión civil, la participación del acusado en ese hecho, la calificación jurídico penal del hecho, su antijuridicidad, la imputabilidad del hechor y su culpabilidad, en cuanto este obró dolosa o culposamente.

12°.- Que, en la especie, la demandada fue condenada por sentencia firme dictada en procedimiento abreviado seguido ante el 7° Juzgado de Garantía de Santiago, RIT O-20522-2016, RUC N° 1400954061-0, a la pena de 41 días de prisión en su grado máximo más accesorias y multa, en calidad de autora del delito de soborno contemplado en el artículo 250 del Código Penal en relación al artículo 248 bis del mismo código, fundado en el hecho irrefutable establecido en el proceso penal referido a que *“Durante el año 2011, el imputado Wladimir Antonio Poblete Vidal, en su calidad de funcionario público administrativo de la unidad regional de Subvenciones de la Región Metropolitana, del Ministerio de Educación, suscribió y autorizó la petición de fondos N° 9807, respecto del establecimiento educacional Escuela especial de lenguaje “Juguemos en el Bosque” de la comuna de*



Maipú, establecimiento en el cual la imputada Arlette Rozas Saavedra era sostenedora. Dicha petición de fondos tuvo como respaldo el proceso de reliquidación final del año escolar 2011, y presentó errores tanto en el respaldo así como en un ajuste manual de asistencia, los que en definitiva significaron un pago por capacidad de alumnos que excedía la autorizada para dicho establecimiento, según Resolución de reconocimiento oficial de la Secretaría Ministerial de Educación de la Región Metropolitana, pagándose un monto de \$54.588.127, el que se materializó el día 20 de abril de 2012. Wladimir Antonio Poblete Vidal, en su calidad de sectorialista del Departamento Provincial Poniente de Educación, del Ministerio de Educación, era responsable de analizar, verificar y reportar cualquier error en el referido proceso, de manera tal que con su actuar ocasionó un pago en exceso, con evidente perjuicio fiscal y con una deuda en favor del Ministerio de Educación. A modo de retribución para ejecutar o por haber ejecutado actos con infracción a los deberes de su cargo, durante el mes de abril de 2012, el imputado Wladimir Poblete, solicitó recibir beneficios económicos ascendentes a la suma de \$25.000.000 de parte de la imputada Arlette Leandra Rozas Saavedra, representante legal de la Sociedad Servicios Educativos Rozas y Rozas SpA., sostenedora del establecimiento educacional Escuela especial de Lenguaje “Juguemos en el Bosque” de la comuna de Maipú, y Rozas Saavedra consintió en el pago. El monto de \$25.000.000 solicitado por Wladimir Poblete, fue pagado por la imputada en dinero efectivo, en un sobre que entregó al imputado en las afueras del mall Plaza Oeste”.

13°.- Que según se observa, la sentencia penal no sólo acredita el hecho ilícito, sino que además, atendida la naturaleza del procedimiento abreviado, la comisión de aquel se encuentra aceptada por la demandada de autos, lo que permite concluir conforme al mérito de dicho fallo, que aquella obtuvo del fisco fraudulentamente, en conjunto con el coimputado, prestaciones improcedentes mediante el pago en exceso por \$ 54.588.127, de fondos de subvenciones del Ministerio de Educación, al establecimiento educacional del que la demandada era sostenedora y que excedía al autorizado, ocasionando un perjuicio fiscal ascendente a dicha suma.

14°.- Que, enseguida, corresponde apuntar a los presupuestos de la responsabilidad extracontractual que funda la demanda. Estos son: a)



capacidad; b) actuación u omisión (hecho ilícito); c) culpa o dolo (imputabilidad); d) daño y; e) relación de causalidad.

15°.- Que conforme a lo expuesto, y en particular por aplicación de los artículos 178 y 180 del Código de Procedimiento Civil ya enunciados, la sentencia penal condenatoria dictada en el procedimiento abreviado a la que se hizo alusión, permite acreditar todos los presupuestos del estatuto que se reclama, en tanto la comisión del delito penal implica la ocurrencia del hecho ilícito civil, pues existe una conducta dolosa desplegada por la demandada que causa un perjuicio al Fisco de Chile, pues aquella, mediante el pago de \$25.000.000 al funcionario público del Ministerio de Educación, obtuvo declaraciones erróneas para obtener el pago de subvención en un monto muy superior al autorizado -\$ 54.588.127-. Luego, el hecho ilícito y el perjuicio, se encuentra expresamente asentado en la sentencia penal en cuestión.

16°.- Que como corolario de lo que se ha razonado, la condena penal como autora del delito referido conlleva que corresponde a la demandada reparar el perjuicio causado por el hecho punible, de manera que se encuentra demostrada la existencia de un daño que es causal y normativamente atribuible al ilícito cometido por la apelante, como también su monto, aunque limitado en la demanda a una suma inferior a la demostrada.

17°.- Que habiéndose establecido la concurrencia de la totalidad de los presupuestos que hacen procedente la responsabilidad extracontractual que funda la pretensión del actor, solo cabía acoger la demanda, tal como decidió el juez a quo.

18°.- Que por otra parte, lleva la razón el actor en su escrito de adhesión a la apelación, desde que no puede preterirse la regla de reparación integral del daño que cimenta nuestra legislación en la materia, esto es, que permita a la víctima restituirse al estado anterior de la ocurrencia del hecho ilícito, tal como se deriva de lo dispuesto en los artículos 2314 y 2329 del Código sustantivo, de manera que para mantener el poder adquisitivo inicial del dinero, que experimenta mermas producto del fenómeno de la inflación, la suma referida ordenada pagar deberá reajustarse de acuerdo con la variación que experimente el Índice de Precios al Consumidor entre el último día del mes anterior al hecho ilícito y el que anteceda al pago.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 186 y 310 del Código de Procedimiento Civil, se declara:



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: MSKXXNKMXXH

I.- Que se rechaza la excepción de prescripción opuesta por el demandado en segunda instancia;

II.- Que **se confirma** la sentencia de veinticuatro de julio de dos mil veinte, dictada por el 13° Juzgado Civil de esta ciudad, en los autos Rol C-26.345-2017, caratulados “Fisco de Chile con Rozas”, con declaración de que los reajustes deberán pagarse de la forma en que se dispone en este fallo.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Redactó la ministra Lilian Leyton Varela.

Rol 13.800-2020

Pronunciada por la **Octava Sala** de esta Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la ministra señora Dobra Lusic Nadal e integrada, además, por la ministra señora Lilian Leyton Varela y el abogado integrante señor Waldo Parra Pizarro.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: MSKXXNKMXXH

Pronunciado por la Octava Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Dobra Lusic N., Lilian A. Leyton V. y Abogado Integrante Waldo Leonidas Parra P. Santiago, dos de mayo de dos mil veinticuatro.

En Santiago, a dos de mayo de dos mil veinticuatro, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: MSKXXNKMXXH